

Editorial

Despliegue y anuncio presidencial en Biobío

La primera salida a terreno de un Presidente de la República suele tener un fuerte contenido simbólico. No sólo marca el tono del inicio de una administración, sino también las prioridades que el nuevo Mandatario busca transmitir al país en esos primeros días y semanas desde su llegada al cargo. En ese contexto, la decisión del Presidente José Antonio Kast de viajar a la Región del Biobío pocos días después de asumir el cargo, con una visita que incluyó la localidad de Lirquén, una de las zonas afectadas por los incendios forestales de enero recién pasado, constituye una señal política y administrativa que trasciende lo local.

En primer lugar, se trata de un gesto dirigido a los miles de damnificados que aún enfrentan las consecuencias de los incendios forestales de enero. La presencia del Mandatario en terreno, dialogando con vecinos y autoridades locales, transmite la idea de que la emergencia no ha quedado relegada al plano de las estadísticas ni a los informes técnicos. Al contrario, instala la reconstrucción como una prioridad del inicio de su mandato. Para las comunidades afectadas, que muchas veces perciben la distancia entre las decisiones del nivel central y la realidad cotidiana, este tipo de despliegue presidencial puede convertirse en una señal concreta de acompañamiento institucional.

Pero el mensaje no está dirigido únicamente al Biobío. También se proyecta hacia el resto del país. Elegir una zona golpeada por una catástrofe como primer destino presidencial refuerza una idea que el Ejecutivo parece querer instalar desde el inicio, como es la presencia activa del Estado en los territorios donde se producen emergencias. En un país que periódicamente enfrenta incendios forestales, terremotos, inundaciones o sequías, la capacidad del gobierno central para desplegarse con rapidez y liderazgo en las zonas afectadas es un factor clave para fortalecer la confianza pública.

En ese sentido, la visita presidencial puede leerse como una señal de que la gestión de crisis y la respuesta temprana serán parte central del sello de esta administración, o al menos ese es el compromiso que se quiere demostrar.

El segundo elemento relevante de la visita fue el anuncio del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa que el Ejecutivo presentará al Congreso y que busca establecer un marco más amplio y permanente para enfrentar procesos de recuperación tras catástrofes. Aunque los detalles del texto deberán cono-

cerse una vez ingresado formalmente al Parlamento, el propio Presidente Kast adelantó algunos de sus ejes centrales, que pasan por la reconstrucción física, económica, institucional, fiscal y del orden legal y seguridad pública.

El eje de la reconstrucción física plantea la necesidad de agilizar los mecanismos para la recuperación, reduciendo tiempos administrativos y facilitando la coordinación entre distintos organismos del Estado. También se mencionó la creación o fortalecimiento de instrumentos que permitan canalizar recursos de manera más eficiente hacia las zonas afectadas, así como la participación de gobiernos regionales y municipios en los procesos de planificación y ejecución de las obras.

Este punto adquiere especial relevancia en el contexto del Biobío. En esta materia, el proyecto buscaría establecer mecanismos específicos para la reposición de viviendas, apoyo a pequeños productores y recuperación de infraestructura local. Además, se ha señalado la intención de incorporar medidas que permitan abordar la dimensión productiva de las zonas siniestradas, considerando que muchas comunidades dependen directamente de actividades agrícolas, forestales o de pequeña escala que resultan gravemente afectadas tras este tipo de eventos.

La discusión de esta iniciativa abrirá, inevitablemente, un debate político en el Congreso, y será el momento en que oficialismo y oposición confronten visiones respecto del rol del Estado, los mecanismos de financiamiento y el alcance de las medidas propuestas.

Evitar la caricaturización del adversario político será clave para que el debate contribuya a mejorar el proyecto en lugar de entorpecerlo. La reconstrucción tras catástrofes no debería convertirse en un terreno de trincheras ideológicas, sino en un espacio donde prime la responsabilidad pública. Para las comunidades que aún esperan soluciones concretas, lo relevante no es quién obtiene la ventaja política, sino que las decisiones lleguen a tiempo y con eficacia. Ese, en definitiva, será el verdadero examen que debe aprobar primero el proyecto de Reconstrucción Nacional, proceso que se espera cuente con un debate democrático de calidad que aporte y defina en los tiempos que se requieren.

La discusión de esta iniciativa abrirá, inevitablemente, un debate político en el Congreso, y será el momento en que oficialismo y oposición confronten visiones respecto del rol del Estado, los mecanismos de financiamiento y el alcance de las medidas propuestas.